

Alberto Carrio Sampedro

Tot s'aprofita

3 de octubre de 2017.

Decía Pere Calders que hay dos problemas terribles de la vida en comunidad que se agravan porque se dan conjuntamente: la falta de comunicación entre la gente y la delgadez de las paredes. La primera fomenta los prejuicios y nos hace albergar convicciones que, por definición, son irracionales. La delgadez de los tabiques nos reconforta en la ignorancia pero no sirve para liberarnos de la pesada carga de vivir en comunidad, que a duras penas soportamos por razón de la buena vecindad. La convivencia a veces es difícil y en algunas comunidades más.

Como sabe cualquiera que viva en una comunidad de vecinos y vecinas, la estrategia no radica en quererse ni tampoco en dejarse llevar por la situación y los prejuicios. Lo verdaderamente importante es ponerse de acuerdo para solucionar el problema y volver lo antes posible a la comodidad del hogar particular. Por otra parte cada más global. La importancia que concedemos a la palabra obliga, ciertamente, a soportar argumentos ininteligibles y conversaciones que se bifurcan en miles de vericuetos y desvían la atención del problema principal. Allá cada cual a la hora de justificar su propia irracionalidad Nadie dijo que fuera fácil. Pero desde luego es imposible si nos negamos a dialogar. Siempre hay diferentes formas de organizar la convivencia vecinal. Lo verdaderamente difícil no es imponer la vía que creemos más adecuada, sino hacer el esfuerzo por llegar a un acuerdo para transitar por la más ventajosa y si esto no es posible, por la menos perjudicial.

Hoy la política española se encuentra en una vía muerta. A decir verdad, esta era la única meta que podía alcanzar el tren que el gobierno de Rajoy alimentó con el humo de la desidia y la leña de la burla institucional. El abuso y la mofa repugnan a la democracia porque ignoran que su regla de oro es tratar al otro como igual. Nadie está a salvo de culpa. Pero que las instituciones catalanas hayan cometido errores de bulto o que hayan sido erráticas y poco escrupulosas con el respeto a la legalidad no justifica en ningún caso la violencia, ni otorga carta blanca para defender el Estado de derecho por la senda de la ilegalidad. Por eso, aunque discrepemos en el cómo y en el qué, nadie podrá negar que hasta las vísperas del 1-0 las instituciones catalanas se han mostrado dispuestas a negociar. Quizá sea difícil hacerlo si se imponen condiciones. Pero desde luego resulta del todo imposible si una parte se enroca en la banalidad del argumento de que hay cosas de las que no se puede hablar, como hasta ahora ha hecho el frente PP-PSOE-C's. Flaca defensa de la democracia hacen quienes quieren encerrarla en los márgenes de una legalidad inútil para afrontar un problema político que, con mucha dificultad, sólo políticamente se podrá solucionar. Dicen que la paciencia es el arma de los débiles, de los fuertes la debilidad. Quizá por eso prefieran abusar que dialogar. Entre otras cosas porque para rebatir los argumentos primero es necesario escuchar. Ser consciente del problema es incompatible con empeñarse en la sinrazón del "y tú más". De lo contrario es imposible negociar. Insisto ser conscientes del problema exige tratarlo con respeto y seriedad.

Respeto porque plantear la disyuntiva entre españoles y catalanes no es más que una forma nimia de simplificar el problema o, lo que es lo mismo, tratar de obtener rentabilidad política de él cuando la política aun no ha comenzado a caminar. No se trata de dividir a personas por bandos, lo que queremos es que nos dejen opinar. Podemos, por supuesto, discutir el valor legal que tengan esas opiniones o para qué deben contar. Pero opinar nunca puede ser el problema porque, de serlo, el problema se traslada a la falta de libertad para expresar libremente la voluntad individual.

Cuesta creer que este fin de semana tanta gente en Catalunya se pusiera de acuerdo para cometer una ilegalidad tan terrible y descomunal: mantener los colegios abiertos como una muestra de respeto y defensa de los bienes de la comunidad. Lugares en los que, este como cualquier otro fin de semana los niños y niñas acuden para aprender y jugar. Es cierto que este fin de semana hubo más afluencia de personas, que pese a ser conscientes de las implicaciones

legales que lea podía acarrear, nos ayudaron a mantener abiertos los colegios para que nuestros niños no vieran disturbadas sus actividades extraescolares. Hubo por supuesto mucha gente que no fue y otra que pasó pero no quiso entrar. Al fin y al cabo como todo el mundo podía hacerlo la decisión quedaba al albur de cada cual. No se me ocurre mejor respuesta a la orden de la Fiscalía, por otra parte más que dudosa en términos estrictamente legales, de precintar los colegios debido a una mera sospecha de posible ilegalidad. Desde luego es difícil encontrar forma más adecuada de enseñar a nuestros hijos el valor de la democracia y el respeto por los demás. Quizá hayamos cometido una ilegalidad, pero si es así, quienes defienden la legalidad vulnerada deberían hacérselo mirar.

Hoy los colegios están desvencijados, rotos, humillados. Permanecen, eso sí, los libros pisoteados, las marcas de las pelotas de goma en las paredes y el dolor inmenso que ha dejado toda esta brutalidad. Huellas de la violencia que aquí, como en cualquier otro lugar, serán difíciles de borrar. En esta comunidad global de paredes tan delgadas es imposible justificar cabalmente la actuación brutal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que arrancaron de las manos de la gente unas urnas que eran la prueba definitiva de una ilegalidad que, por otra parte, ya se había encargado de proclamar la Fiscalía actuando, de nuevo, sin ningún respeto por la legalidad y la división de poderes. Porque claro defender el Estado de derecho es un argumento de ida y vuelta, a salvo que alguien se crea con la potestad de usarlo a su antojo y entonces el derecho se convierte en desecho, el Estado es detestado y montamos un lío descomunal. En esas urnas iban sueños que probablemente no tuvieran valor jurídico alguno pero poseen sin duda un elevado valor moral. Llevaban impreso el deseo de la gente que quería ser escuchada con independencia de la decisión que prefirieran tomar.

Nadie se llame a engaño. El sueño de la democracia que salió en volandas de las escuelas poniendo en peligro la integridad física y dañando para siempre la moral de las personas allí presentes, no ha tardado en volver a las calles y plazas de Catalunya, de Madrid, de Asturias, de Andalucía, de Euskadi y de tantos otros lugares más. Y los sueños son muy peligrosos porque son inmunes a los disparos, son tan vaporosos que no se dejan alcanzar.

Seriedad, en fin, porque enfocar el problema a partir del binomio independentismo-nacionalismo quizá sea cómodo para los intereses espurios de aquí y de allá, pero es un argumento de corto recorrido, genéricamente inválido y, además cierra más puertas de las que abre a fuerza de simplificar el problema. Pero sobre todo porque esta forma de presentar las cosas impide diferenciar adecuadamente entre las partes de ese binomio por la sencilla razón de que, para evaluarlas, primero hay que despejar la incógnita principal: saber cuánta gente quiere votar. Parece mentira que en estas estemos todavía. Que haya transcurrido tanto tiempo y que el único movimiento que se haya producido haya sido el paso en falso de la represión policial. Nunca hubo ni habrá suficientes armas para enmudecer los gritos de libertad, para derrotar las manos levantadas de millones de personas que claman en el desierto "som gent de pau. Volem votar".

Una vez abierta la puerta a la represión desmedida, absurda, desproporcional, tan sólo se puede esperar que por ella se cuelen la desidia y la irracionalidad. Exactamente lo que pretenden quienes se niegan a afrontar el problema, quienes ignoran el valor de la palabra y dan la espalda al diálogo porque son incapaces de negociar de igual a igual. Digámoslo claramente, no nos encontramos sólo ante un problema de banderas. Es un problema que va mucho más allá porque pone en cuestión el statu quo actual. Seamos serios y afrontémoslo en toda su amplitud.

No queda mucho lugar para la esperanza. Nos han dado donde más nos duele, han destrozado nuestros colegios, herido a nuestros vecinos y vecinas. Han pisoteado nuestra dignidad. Dejar que la gente se exprese nunca puede ser ilegal en democracia, eso son cosas que tienen otro nombre que ni siquiera me atrevo a mencionar.

Hubo oportunidades para pactar las condiciones adecuadas de una consulta que debió hacerse mucho tiempo atrás. Entonces podríamos haber escuchado con claridad los argumentos en favor de las distintas opciones. Los de corto recorrido que empiezan y terminan en el nacionalismo, el de aquí y el de allá. Pero también argumentos liberales o los estrictamente republicanos de

justicia, igualdad y solidaridad internacional que justifiquen, si acaso, la creación de una nueva república con otras señas de identidad. Tan sólo así podríamos haberlos valorado en Catalunya, en España y en cualquier otro lugar. Tan sólo así, en definitiva, tendríamos razones para enjuiciar la razón preferida por cada cual. No se si aun estamos a tiempo. El zafio mensaje del rey, sin ningún derecho moral a hablarnos de democracia e igualdad, ha supuesto la gota que colma el vaso. La situación es desesperante, necesitamos un proceso constituyente ya. Tanta necedad ha conducido a la política española a un punto de no retorno. Una vía muerta como aquella de la que el maestro Calders diagnosticaba que el fallecimiento se había producido por falta de trenes que la quisieran transitar.